

ron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por el C. Cipriano Lopez, contra el presidente municipal de Pachuca, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor fiscal dice: que es de conformidad con lo que el C. presidente municipal asegura en su informe fecha 21 del corriente sobre que los cuerpos municipales pueden ó no expedir patentes, imponer multas y dictar medidas que tiendan á la salubridad, seguridad y buen gobierno de las poblaciones que tienen bajo su custodia inmediata.

Para fundar el derecho que el C. presidente municipal ha tenido al dictar la orden que impide al C. Cipriano López ejercer su comercio en la tienda que tiene situada ha cinco meses cerca del tiro viejo de la mina que se conoce con el nombre del Carmen, cita los artículos 17 y 40 del bando de buen gobierno vigente, y añade además los inconvenientes que se originarán si se le permitiera continuar con su comercio. Mas como quiera que el mismo bando en su artículo 2º y que á la letra dice: “Los dueños de pulquerías y tinacales que están fuera de garita son responsables de

“cualquier desorden que se cometa por las reuniones que consientan en sus giros, y “la autoridad les hará efectiva una multa, “según sus proporciones, cuando no procuren evitar el desorden que se promueva, “sin perjuicio de las demás á que hubiere “lugar según las leyes” autoriza la existencia de pulquerías fuera de la ciudad, sujetas por supuesto á tales ó cuales restricciones y penas; el impedirlo al C. Cipriano Lopez por solo las razones de que puedan abrigarse en la referida tienda los malhechores, y el de haberla tenido abierta sin la autorización correspondiente, con otras que son demasiado infundadas, es atacar las garantías que otorga la Constitución general en su artículos 4º y 16, pues aun cuando el C. presidente municipal dice que no se exige al C. López el que se dedique á determinado comercio, sin embargo se le prohíbe hacerlo en lugar que por el mismo bando de buen gobierno le es permitido.

Para que no se crea, como se teme, que la justicia federal se arroga una jurisdicción extraña, me bastará suplicar al C. presidente municipal se recuerde los varios casos en que se ha negado el recurso de amparo á los que sin fundamento lo han interpuesto.

Estando, pues, conforme el recurso solicitado por el C. Cipriano López con el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, soy de parecer que el juzgado debe conceder el amparo que se pide.

Pachuca, Agosto veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Macedonio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez.

Vistos estos autos promovidos por el C. Cipriano López contra el presidente municipal de esta ciudad por violacion de las garantías consignadas en los artículos 4 y 16 de la carta fundamental, visto el escrito en que la parte agraviada refiere, que

teniendo hace algunos meses fuera de la poblacion, una casa de comercio donde expende abarrotes, pulques y otros efectos, el presidente municipal se la ha mandado cerrar, á pretexto de que en ella *pueden* abrigarse los malhechores, y le impuso una multa de cinco pesos; visto el informe de la autoridad responsable en el que manifiesta, que es cierto lo expuesto por el quejoso; que á los cuerpos municipales toca dictar las disposiciones convenientes al buen orden y seguridad de las poblaciones; que el expendio de pulques y demas bebidas embriagantes, como mas á propósito para producir males ha sido siempre lo que mas se ha vigilado y reglamentado por disposiciones municipales; que en esos reglamentos se prohibe el expendio en ciertos dias y en ciertas horas y se dictan otras disposiciones que tiendan á evitar los delitos; que los que se dediquen á ese comercio saben de antemano que deben sujetarse á tales restricciones, aun cuando se coarte la libertad; que el art. 27 del bando de buen gobierno faculta á la expresada autoridad para expedir patentes ó licencias para abrir tales giros; que al expedirlos se consulto la conveniencia ó inconveniencia de estos establecimientos á fin de impedir que por el lugar donde se situen se cometa algun perjuicio á la poblacion; que al C. López se negó la licencia que pedia, porque teniendo su casa de comercio en un lugar despoblado, lejos de la vigilancia de la policía, no se pueden impedir los delitos que puedan cometerse; y que la multa se impuso por infraccion del bando de buen gobierno, conforme á la facultad que este mismo le concedió en su art. 40.

Considerando, respecto á la garantía consignada en el art. 4º constitucional:

Primero; que segun esta disposicion las autoridades gubernativas solo pueden impedir el ejercicio del comercio cuando *ofenda* los derechos de la sociedad; mas no cuando *pueda* ofenderlos.

Segundo; que la providencia de cerrar la

casa de comercio del C. Lopez, no está basada en que por ella se *ofendan* tales derechos sino en que *pueda* ofenderlos, cuya extension al precepto constitucional, constituye la infraccion.

Considerando ademas; que si bien es cierto que á las autoridades municipales toca velar por la seguridad y el orden público, esto se entiende ya organizando una buena policía que vigile los lugares peligrosos, que aprehenda á los autores de los desórdenes etc., pues con este objeto pagan los CC. y principalmente los comerciantes sus contribuciones generales y municipales; ya imponiendo multas á otras penas correccionales á los dueños de establecimientos que consientan en ellos reuniones peligrosas y contrarias á las leyes; ya dictando otras medidas semejantes; pero de ningun modo cerrando absolutamente, ni por algunos dias ni por ciertas horas, los expresados establecimientos, porque esto no es reglamentar sino atacar y matar la libertad del comercio.

Tercero; que la arbitrariedad del presidente municipal es tanto mas notoria, cuanto que las disposiciones municipales en que se funda, no prohiben ni podrian prohibir que se establezcan pulquerías en lugares despoblados, sino que hace responsable á los dueños de los desórdenes que en ellos se cometan, (art. 2º del bando de buen gobierno de esta ciudad.)

Considerando por último: que la imposicion de la multa no ataca al art. 16 constitucional, supuesto que es el ejercicio de una facultad que el art. 21 de la Constitucion otorga á las autoridades gubernativas. Con fundamento de lo expuesto y del art. 101, fraccion 1ª de la Constitucion general, se decreta: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Cipriano López contra la providencia del presidente municipal de esta ciudad, en virtud de que mandó cerrar la casa de comercio del quejoso, y no se ampara ni protege contra la multa que se le impuso por la propia autoridad.

Hágase saber, publíquese, sáquense las copias respectivas para el "Semanario Judicial," prevengase al C. Lopez reponga el papel de estas actuaciones, por el del sello correspondiente, por no haber comprobado debidamente su insolvencia, y remítanse estos autos en revision á la Suprema Corte de Justicia de la nacion.

Así sentenció y firmó el C. juez de Distrito de Hidalgo, Lic. Miguel Mejía. Doy fé.—*M. Mejía.*—*Francisco Briseño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por el C. Cipriano Lopez, contra una providencia del C. presidente municipal del Distrito de Pachuca, en virtud de la cual se le ordenó cerrar su establecimiento de comercio situado en el Tiro viejo de la mina del Carmen, imponiéndosele ademas una multa de cinco pesos por no haber sacado la licencia correspondiente para el expendio de pulques, alegando el peticionario que dichas providencias importan una violacion expresa de las garantías otorgadas por la Constitucion general de la República en sus artículos 4 y 16. Vistas las constancias de autos y considerando: en cuanto al primer punto, que no basándose la providencia de la autoridad municipal en hecho alguno que la legalice, porque se funda en temores sobre que en la referida casa puedan abrigarse malhechores y cometerse desórdenes á causa del expendio de licores, teniendo como tiene la autoridad medios para prevenir esos males sin perjudicar la libertad del comercio, garantizada por el art. 4º de la Constitucion general de la República, la providencia del presidente mu-

nicipal importa la violacion de dichas garantías.

Considerando: en cuanto al segundo punto, que la autoridad ha obrado en la órbita de sus atribuciones, al imponer al quejoso una multa de cinco pesos por contravencion á las disposiciones de policía; con tales fundamentos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, cuya parte resolutive, dice:

Primero; con fundamento de lo expuesto y del art. 101 fraccion 1ª de la Constitucion general, se decreta: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Cipriano Lopez, contra la providencia del presidente municipal de esta ciudad, en virtud de la que mandó cerrar la casa de comercio del quejoso, y no se ampara ni protege contra la multa que se le impuso por la propia autoridad."

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, veinte de Octubre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.